



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso: Ordinario Laboral  
Radicación: 05001-31-05-016-2018-00478-01  
Demandante: Rocío del Carmen Cataño Valencia  
Demandado: Colpensiones  
Asunto: Apelación  
Procedencia: Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín  
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique  
Temas: Pensión de sobrevivientes cónyuges separados de hecho,  
prueba de la convivencia

**Medellín, enero treinta y uno (31) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el 5 de agosto del año 2020, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora ROCÍO DEL CARMEN CATAÑO VALENCIA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, Radicado 05001-31-05-016-2018-00478-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

La señora ROCÍO DEL CARMEN CATANO VALENCIA, convocó a juicio a COLPENSIONES, pretendiendo se declare que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge, señor Conrado Antonio Ruíz Bedoya, a partir del 19 de octubre del 2015, reconociendo la prestación con los intereses.

En respaldo de tales pedimentos, se expuso que el señor Conrado Antonio Ruíz Bedoya, cónyuge de la demandante, fue pensionado por el ISS a partir del 1º de enero de 1980, falleciendo el 19 de octubre del 2015, el mismo que convivió en forma permanente e ininterrumpida con la demandante, desde el 20 de diciembre de 1997 hasta el 15 de enero del 2003, explicando que a pesar de la separación de hecho que se había presentado entre la pareja, el pensionado nunca dejó a su cónyuge desamparada, ya que le ayudaba económicamente con lo que percibía por concepto de su pensión, siendo la accionante ama de casa y dependiente del causante.

Afirmó que el 5 de octubre del 2016 se solicitó la sustitución pensional, la que le fue negada por medio de la Resolución GNR 368231 del 5 de diciembre del 2016, bajo el argumento que no se demostró el requisito de la convivencia durante los últimos 5 años anteriores al deceso del pensionado, decisión confirmada por las Resoluciones GNR 715 del 2017 y VPB 6451 del 2017.

### **1.2.- CONTESTACIÓN**

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, indicando que no le consta lo relacionado con la convivencia que se alega se

dio entre el causante y la demandante, adhiriéndose a lo que resulte probado en el proceso.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación a reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes; buena fe; prescripción e inexistencia de obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

Mediante fallo proferido el 5 de agosto del 2020, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, negó la totalidad de las pretensiones de la demandante, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación y condenando en costas a la demandante.

### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

#### **Demandante**

El apoderado de la actora se aparta de la decisión presentando recurso de apelación, indicando que el sentenciador primigenio no valoró en su conjunto la prueba documental y testimonial, con las cuales se logra acreditar la convivencia de la demandante y el causante por un término de cinco años de manera ininterrumpida, en cualquier término, restándole credibilidad el Juez a los testimonios que fueron unánimes, quienes sabían cuando contrajeron nupcias, conocieron el lugar de residencia, la época de inicio de la convivencia y lo relacionado con la separación, así como el tiempo real de convivencia, conociendo, además, que el causante le continuaba ayudando económicamente a la demandante, dando fe de otros aspectos de la pareja, por su amistad.

Continúa indicando que el fallador omite darle valor al contenido de la Resolución GNR 3682312 del 2016 y GNR 715 del 2017 donde la misma

demandada acepta que la pareja convivió 8 años, desde 1997 hasta el 2005, pues así lo determinó la investigación administrativa ordenada por la entidad.

Agregó que no se comparte la afirmación del a quo consistente en que no existió ayuda mutua de la demandante hacia el causante, ya que conforme a los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia, lo único que debe demostrar la cónyuge separada de hecho, es la convivencia de cinco años en cualquier término y que el vínculo permanezca vigente al momento del deceso del causante, no aplicando el fallador la jurisprudencia actual para este tipo de asuntos, citando apartes de la sentencia SL 41821 del 2012.

Adujo que se acreditó que, para la fecha del fallecimiento del pensionado, el matrimonio se encontraba vigente, por lo que la accionante es la beneficiaria de la sustitución pensional, desconociendo la decisión del Juzgado, la posición de la Corte Suprema de Justicia plasmada en la sentencia SL 1399 del 2018.

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, no se pronunció ninguna de las partes.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

## **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA**

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor Conrado Antonio Ruíz Bedoya falleció el 19 de octubre del 2015, tal y como se desprende del registro civil de defunción, obrante a folio 15 del anexo 01 del expediente digital.
- Que los señores Conrado Antonio Ruíz Bedoya y Rocío del Carmen Cataño Valencia, contrajeron matrimonio por los ritos católicos el 20 de diciembre de 1997, según se observa en el registro civil de matrimonio visible a folio 16 del anexo 01 del expediente digital.
- Que el extinto ISS, por medio de la Resolución No. 9952 del 25 de julio de 1980, le reconoció al causante pensión de invalidez permanente total de origen no profesional, provisionalmente por el término de 1 año, contado a partir del 1º de enero de 1980, fecha en la que dejó de percibir subsidios, en cuantía de \$3.496,80, tal y como se desprende del documento obrante a folios 24 a 26 del anexo 01 del expediente digital.

## **2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Es procedente revocar el fallo dictado en primera instancia, para en su lugar condenar a Colpensiones a reconocer la pensión de sobrevivientes a la demandante, verificando para el efecto si la misma acredita el cumplimiento de los requisitos para acceder al derecho prestacional en calidad de cónyuge separada de hecho?

## **2.4.- TESIS**

El problema jurídico planteado se resuelve bajo la tesis según la cual, a la demandante no le asiste el derecho a la sustitución de la pensión que dejó causada su cónyuge, el señor Conrado Antonio Ruíz Bedoya, en tanto no se acreditó una convivencia con el causante por un periodo mínimo de cinco años, en cualquier tiempo, en consecuencia, la sentencia debe ser CONFIRMADA, como se explica:

## **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

En voces de la Corte Constitucional *“El derecho a la pensión de sobrevivientes es “(...) la garantía que le asiste al grupo familiar de una persona que fallece siendo afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para reclamar la prestación que se causa precisamente con tal deceso”. De otro lado, el derecho a la sustitución pensional le asiste al grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez, para reclamar, ahora en su nombre, la prestación que recibía el causante. Debe enfatizarse en que, pese a la distinción nominal entre la pensión de sobrevivientes propiamente dicha y la sustitución pensional, la jurisprudencia constitucional se ha referido en múltiples oportunidades al propósito que comparten ambas. Al respecto, la Corte señala que “busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento”. Asimismo, esta prestación social “suple la ausencia repentina del apoyo económico del pensionado o del afiliado del grupo familiar con el fin de evitar que su muerte se traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsistencia mínimas de los beneficiarios de dicha prestación” (sentencia SU 141 de 2021).*

Los artículos 12 de la Ley 797 del 2003, que modifican los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993, vigentes para la fecha del fallecimiento del señor Conrado Antonio Ruíz Bedoya, dispone:

*“Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: ...*

*1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y, ...”*

A su vez el artículo 13 de dicha normatividad, define como beneficiarios de la prestación a:

*“ARTÍCULO 13. Artículo 74. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:*

- a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.*
- b) (...)*

*Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.*

*En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. [ en proporción al tiempo de convivencia Sentencia C-1035-08] Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente...”*

De conformidad con el inciso tercero del literal b) del citado artículo 47, el cónyuge separado de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes y para ello le basta acreditar i) la vigencia del vínculo matrimonial y de la sociedad conyugal y ii) cinco años de convivencia en cualquier tiempo, lo anterior independientemente de si después de la separación, subsistieron los lazos familiares y afectivos entre la pareja, así lo adocrinó la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencia SL 359 radicado 86405 del 3 de febrero del 2021, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, al indicar:

*“Al respecto, esta Sala ha señalado que la demostración de los lazos familiares y afectivos, en el caso de la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separado de hecho del causante, no es una exigencia prevista en el inciso 3.º del literal b). Lo anterior, en la medida que el texto de tal disposición establece que, en ese evento, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido.*

*En efecto, esta Corporación tiene adocrinado que «la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado (...) en un periodo de 5 años», puede ser acreditado «en cualquier tiempo». Ello, en aras de cumplir la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del de cujus, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41673, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019, CSJ SL4047-2019, CSJ SL4771-2020, CSJ SL3850-2020 y CSJ 2746-2020).*

*Por lo visto, es incorrecto sostener que la cónyuge separada de hecho no tiene la posibilidad de acceder a la pensión de sobrevivientes pese a que su vínculo matrimonial está vigente.*

*Acerca de dicha tesis, en sentencia CSJ SL5169-2019, esta Sala explicó que la misma corresponde al verdadero alcance e intelección del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, porque aunado a lo referido anteriormente acerca de su finalidad, «su contenido encuadra en las realidades o situaciones sociales que regula dicho precepto, esto es, no invisibiliza las diferentes circunstancias que generalmente rodean la dejación de la vida en comunidad entre esposos».*



*En la misma providencia, la Corte señaló que lo anterior obedece a que: (i) comúnmente, la separación de hecho ocurre por problemas estructurales en las relaciones matrimoniales, que a la larga generan el distanciamiento de los consortes; (ii) tales situaciones son imprevisibles por el legislador; (iii) y, por tanto, el rol del juez consiste en interpretar la norma conforme las particularidades de cada caso, es decir, darle el alcance que corresponda según cada situación que no pudo anticiparse en la ley. Conforme ello, anotó que incluso el artículo 176 del Código Civil, no establece dentro de las obligaciones a los cónyuges, las de mantener los lazos afectivos o familiares hasta el momento del fallecimiento de uno de ellos.*

*En ese orden de ideas, la ruptura de las relaciones afectivas con una persona con la que se convivió por virtud del matrimonio no es óbice para acceder a la pensión de sobreviviente, más si se tiene en cuenta, que la norma acusada no dispone tal exigencia”.*

Criterio que guarda armonía con lo adocinado por la Corte Constitucional, Corporación que en sentencia C 336 de 2014, declaró exequible la expresión “La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe sociedad conyugal vigente” contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, así como con la Sentencia C-515 del 2019.

## **2.6.- CASO CONCRETO**

En el asunto bajo análisis se tiene que el señor Conrado Antonio Ruíz Bedoya, quien falleció el 19 de octubre del 2015, ostentaba la calidad de pensionado, tal y como se desprende de la Resolución No. 9952 del 25 de julio de 1980, en la que se le reconoció la pensión de invalidez permanente total de origen no profesional, provisionalmente por el término de 1 año, contado a partir del 1º de enero de 1980, fecha en la que dejó de percibir subsidios, en cuantía de \$3.496,80 -ver folios 24 a 26 del anexo 01 del expediente digital-.

La entidad de previsión social mediante Resolución GNR 368231 del 5 de diciembre del 2016, negó la sustitución pensional a la demandante, argumentando que realizada la investigación administrativa, se estableció que la

pareja contrajo matrimonio el 20 de diciembre de 1997 y convivieron hasta el 2005, fecha en que el causante se va a vivir a Bello con una de sus hijas, acreditándose un tiempo de convivencia de 8 años, no cumpliendo la solicitante con el requisito de los 5 años de convivencia con el causante para el momento de su muerte, decisión que fue confirmada por las Resoluciones GNR 715 del 3 de enero del 2017 y VPB 6451 del 17 de febrero del 2017 –ver folios 28 a 31, 33 a 38 y 40 a 43 del anexo 01 del expediente digital-.

Ahora bien, en sede judicial no se discute que el señor Conrado Antonio Ruíz Bedoya y la señora Rocío del Carmen Cataño Valencia, contrajeron matrimonio por los ritos católicos el 20 de diciembre de 1997, según se observa en el registro civil de matrimonio visible a folio 16 del anexo 01 del expediente digital, pero si el requisito de convivencia en virtud del cual la demandante pueda ser considerada beneficiaria.

Es así como con el fin de acreditar el requisito anterior, la parte actora presentó como testigos a las señoras Ana Rosa Pérez Ospina y Yolanda Amparo Marín de Pérez, la primera de ellas afirmó que fue vecina del señor Conrado Antonio Ruíz Bedoya y la señora Rocío del Carmen Cataño Valencia, la segunda de las deponentes, amiga de la mamá de la actora.

Analizando la declaración presentada por la señora Ana Rosa Pérez Ospina, se tiene que esta informó que la pareja convivió por 8 años aproximadamente, contados desde la fecha del matrimonio, esto es, el 20 de diciembre de 1997, separándose en el 2005. Por su parte, la señora Yolanda Amparo Marín de Pérez, dio fe de una convivencia de la pareja por 7 u 8 años, sin recordar muy bien si el matrimonio se dio en 1997 o en 1998.

Nótese pues como ambas deponentes, se refieren a una convivencia de la demandante y el causante por un periodo de 7 u 8 años, no obstante, tal afirmación contradice lo indicado por propia demandante en su interrogatorio de parte, quien de manera precisa dijo que contrajo matrimonio con el

causante, el 20 de diciembre de 1997 y que convivieron hasta enero del 2003, sin precisar el día, contando con una convivencia de aproximadamente 5 años y 10 días.

Así las cosas, es claro, tal y como lo indicó el a quo, que no se pueden tener como ciertos, los dichos de las declarantes allegadas por la parte actora, respecto de quienes se ve afectada su credibilidad dado que la convivencia que declaran es superior a la afirmada por la hoy solicitante.

Aunado a lo anterior, no se cuenta con otros medios de prueba que permita acreditar la convivencia que se alega existió entre la pareja, por el término mínimo de 5 años, recordando que, si bien la demandante afirma una convivencia de cinco años, el interrogatorio de parte, no tiene eficacia probatoria, bajo la premisa que nadie puede proporcionarse su propia prueba.

Ahora, sobre el punto de inconformidad planteado por el apoderado de la parte actora, esto es, que, en la providencia de primera instancia, no se le dio valor probatorio a la investigación realizada por la demandada, de la cual pudo concluir Colpensiones que la convivencia de la pareja se dio por espacio de 8 años, es de advertir, inicialmente que, en efecto, la investigación es un medio de convicción que debe ser valorado por el fallador.

Las entrevistas efectuadas en el marco de las investigaciones administrativas, tienen el carácter de documentos declarativos de terceros, conforme al artículo 262 del Código General del Proceso “*Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.*”; y, al no solicitarse su ratificación en este proceso, deben ser valoradas en el conjunto probatorio, como lo sostuvo la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia radicación 43212, del 15 de mayo de 2012:

*“... se ha de precisar en primer término que la jurisprudencia de la Sala tiene definido el criterio de que los informes que recogen las investigaciones efectuadas por los funcionarios de las administradoras de pensiones para efectos de determinar la convivencia o la dependencia económica para discernir la condición de beneficiario de un derecho pensional, deben tenerse como “documento declarativo emanado de terceros”, cuya valoración se hace en forma similar al testimonio (...).”*

Pese a ello, en investigación realizada en este caso, solo se encuentran dos entrevistas, la primera realizada a la demandante, quien indicó que convivió con el causante desde el 20 de diciembre de 1997, hasta el año 2005, fecha en la que su pareja viajó a Bello donde una de sus hija, versión que contradice la dada en este proceso y la entrevista a la hija de la accionante, Francy Lorena Valencia, de 29 años, quien refiere que conoció al causante hace 19 años, tiempo en que la pareja inició relación sentimental y luego la convivencia, presentándose luego la separación, la cual no ubica temporalmente.

La contradicción que resta credibilidad a los testimonios, no puede ser resuelta en tanto no existe prueba adicional, que acredite la veracidad de la declaración. Y ello es así porque nótese, por ejemplo, que, como bien lo referenció el a quo, existe otra contradicción interna en el interrogatorio en tanto la pretensora indicó ante el Despacho, que los tres primeros años de matrimonio, la convivencia se dio en Niquia y luego vivieron tres años en la finca que construyeron en el terreno que compraron también en Niquia, lo que daría 6 años de convivencia y no cinco como lo afirmó inicialmente.

En este escenario, cotejada la información consignada en la investigación, con las declaraciones recibidas en la audiencia y el interrogatorio de la demandante, concluye la Sala que no se logró acreditar fehacientemente la convivencia por un término mínimo de cinco años en cualquier tiempo, no siendo posible determinar con certeza que la gestora del proceso hubiese convivido con su cónyuge por un lapso superior a este periodo.

Finalmente, debe señalarse que, en estos casos, como se reseñó en las premisas normativas y lo alega la recurrente, no se exige que hayan persistido los lazos afectivos y el auxilio mutuo entre la pareja, de modo que aunque la demandante no hubiese asistido a su cónyuge en su estado de invalidez, como lo destacó el a quo, ello no impide que la misma pueda acceder a la prestación, siendo la ausencia de prueba de la convivencia por cinco años en cualquier tiempo, la razón jurídica que impide atender los argumentos de la recurrente.

Por lo anterior, la providencia de primera instancia se habrá de confirmar en todas sus partes.

Costas en esta instancia a cargo de la demandante, se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

### **3.- DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

1.- Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el 5 de agosto del 2020, en el proceso ordinario instaurado por la señora ROCÍO DEL CARMEN CATAÑO VALENCIA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

2.- Costas en esta instancia a cargo de la demandante, se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

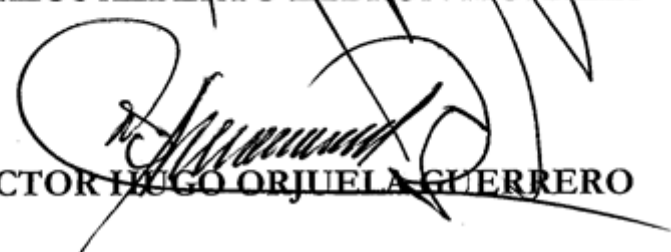
El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**

**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**



**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**